

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 33
O R D I N A R I A

JUEVES 18 DE MARZO DE 2010

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con quince minutos del jueves dieciocho de marzo de dos mil diez, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar Sesión Pública Ordinaria, los señores Ministros Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. No asistió el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz por estar disfrutando de sus vacaciones.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTAS

Proyecto de acta relativa a la Sesión Pública número Treinta y dos, Ordinaria, celebrada el martes dieciséis de marzo de dos mil diez.

Por unanimidad de diez votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves dieciocho de marzo de dos mil diez.

I. 244/2009

Contradicción de tesis número 244/2009 entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 550/2009 y la contradicción de tesis 268/2007-SS, respectivamente. En el proyecto formulado por el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se propuso: *“PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere, en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de las tesis redactada en el último considerando del presente fallo.”* El rubro de la tesis a que se refiere el punto resolutivo Segundo es el siguiente: *“AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN LA DEMANDA FISCAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA DESAHOGAR PREVENCIÓNES”*.

El señor Ministro ponente Gudiño Pelayo expuso los antecedentes de la referida contradicción de tesis y realizó una síntesis de las consideraciones que sustentan la propuesta del proyecto.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia preguntó al señor Ministro Gudiño Pelayo si su propuesta es coincidente con el criterio de la Primera Sala o de la Segunda Sala, ante lo cual el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea precisó que en virtud de una errata surge la confusión, siendo el criterio de la Primera Sala el que esencialmente se propone debe prevalecer.

El señor Ministro Franco González Salas indicó que si bien en principio consideró que no existía contradicción de tesis en virtud de que ambas tesis contienen cuestiones que pudieren complementarse, toda vez que la tesis de la Segunda Sala se enfoca a las atribuciones que no tiene el autorizado del actor en un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que la diversa de la Primera Sala, prevé las atribuciones con las que cuenta y concluye en el mismo sentido, ya que ambas sostienen qué no puede hacer aquél, lo que concluye la relativa a la Segunda Sala. En ese tenor, estimó que aun cuando al parecer no existe contradicción de tesis, podría elaborarse una tesis que complementara ambas.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que en principio podría sostenerse que no hay contradicción de tesis dado que en ambos casos el problema a dilucidar consiste en determinar si el autorizado para oír notificaciones por parte del actor de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuenta o no con

atribuciones para aclarar una demanda. Señaló que la tesis que sustenta la Segunda Sala prevé que tratándose de los requisitos que se establecen en el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se consideran parte misma de la acción, no pueden ser aclarados por el autorizado para oír notificaciones, en tanto que el criterio de la Primera Sala se basa en que la presentación de documentos, cuando se trata de una aclaración de demanda para efectos de un requerimiento de aclaración de documentos, puede hacerlo el autorizado para oír notificaciones. A pesar de lo anterior, tomando en cuenta el nuevo criterio del Pleno sobre los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis podría resolverse conjuntando ambos criterios.

Agregó que en la contradicción de tesis analizada en la Segunda Sala resultó irrelevante el aspecto relativo al requerimiento para que aclare su personalidad, cuando el autorizado no tiene facultades para hacerlo, pues no tiene importancia que le hayan reconocido o no el carácter de autorizado si se encuentra dentro del supuesto de que no es factible que lleve a cabo la aclaración.

Por ende, estimó oportuno que el Pleno emita una tesis que se refiera a todos los supuestos en los que el autorizado puede comparecer para la aclaración de la demanda. Consideró que en principio sería necesario determinar si se requiere el reconocimiento del Tribunal para

sostener que tácitamente se tiene por reconocido al autorizado, existiendo criterios sobre la necesidad de reconocerlo desde el primer auto y otros hasta que se admita la demanda. Posteriormente, en cuanto a las facultades del autorizado, se podría analizar en qué casos de los previstos en el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el autorizado puede realizar el desahogo y en cuáles no.

Señaló que en el caso de la fracción I del citado numeral en la que se hace referencia al nombre del demandante y al domicilio, si no se establece el nombre, se desecha la demanda de entrada y si no se establece el domicilio, se notificará por autos; respecto a la fracción VI, mencionó que si no se señalan los conceptos de impugnación, se desecha la demanda; en tanto que los casos de las fracciones III a VIII, es necesario analizar en cuáles de ellos el autorizado puede realizar los desahogos respectivos. A pesar de lo anterior, en el artículo 15 del propio ordenamiento se hace referencia a los documentos que deben adjuntarse a la demanda, lo cual sí podría realizar el autorizado en tanto que no forman parte de la acción, por lo que será necesario analizar cada fracción.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que existe la contradicción de tesis, ya que la tesis de la Segunda Sala afirma implícitamente que el ejercicio de la acción es un acto personalísimo, sin que ello sea así necesariamente, pues en

el caso de un menor de cierta edad, el tutor puede en su nombre, ejercer una acción al igual que el apoderado general, sin instrucción previa del poderdante, por lo que indicó no compartir la teoría del acto personalísimo de la acción en alguna medida.

Señaló que el criterio implica que mientras en el oficio administrativo no se haya admitido el ejercicio de la acción, no puede haber acuerdos de trámite, lo que no necesariamente es así, pues puede haber trámites previos al ejercicio de la acción, como el requerimiento para complementos documentarios. Estimó que para la Primera Sala la voluntad del otorgamiento de una representación consta por escrito en los términos de ley, en tanto que para la Segunda Sala, mientras no esté admitida la acción no se puede reconocer al accionante, lo que lo llevo a formular un voto particular en su momento.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea estimó que realmente no hay contradicción de tesis, considerando que el rubro de la Segunda Sala no está construido adecuadamente. Sostuvo que las dos tesis señalan que el acto de aclarar o ampliar la demanda es personalísimo y no se puede hacer por el autorizado.

Manifestó que la Primera Sala se pronuncia en el sentido de que se pueden ofrecer pruebas y documentos faltantes a la demanda, en tanto que el criterio de la

Segunda Sala versa sobre el caso de la acción, sin que se refiera a otros aspectos. La Primera Sala manifestó que no era necesario el reconocimiento del autorizado mientras que para la Segunda Sala resulta irrelevante dicho reconocimiento.

En cuanto a la tesis que podría aprobarse sería referente al alcance de las atribuciones del autorizado para desahogar todo tipo de prevenciones excepto ampliar o aclarar la demanda; sin embargo, estimó que únicamente debía aclararse el rubro de la tesis de la Segunda Sala.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia indicó que se manifestaría por la existencia de la contradicción. Estimó que la Segunda Sala sostiene que el acto de autorización no confiere al autorizado facultades para ejercer las atribuciones previstas en el artículo 14 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo con lo que se descartan las actuaciones sobre requisitos materiales, pues implica que mientras no haya acuerdo expreso de reconocer el carácter de autorizado, no se confieren a éste facultades para ejercer la representación otorgada, con lo cual se imposibilita lo considerado por la Primera Sala en cuanto a que el autorizado sí pueda desahogar determinados requerimientos aun cuando no se le haya reconocido tal carácter.

Además, al darse la contradicción de tesis es conveniente abordar el tema con mayor amplitud, siendo relevante determinar en qué momento puede el autorizado actuar dentro del juicio, existiendo tres posibilidades: primera, desde la presentación de la demanda; segunda, hasta después de que se le haya reconocido ese carácter y, tercera, desde la presentación de la demanda y hasta en tanto no haya un acuerdo que le desconozca tal carácter, dado que no es un acto atribuible al autorizado.

Incluso, es necesario abordar el tema relativo al carácter personalísimo del ejercicio de la acción, lo que deriva del juicio de amparo en cuya normativa se exige precisar determinados datos bajo protesta de decir verdad.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó que la tesis de la Segunda Sala da la apariencia de señalar que era necesaria la autorización por parte del tribunal de que ya se tuvo como autorizado para oír notificaciones, lo que consideró un defecto de redacción de la misma que da lugar a confusión pues en el proyecto se sostiene que ni siquiera era relevante analizar si se había o no aceptado la autorización por parte del tribunal, porque se pretendía que el autorizado presentara cuestiones directas a la acción, lo que no resultaba necesario mencionar.

Sometida a consideración la propuesta del Considerando Quinto relativo a la existencia de la

contradicción de tesis, por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia se determinó que sí existe dicha contradicción. Los señores Ministros Franco González Salas y Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra.

El señor Ministro Aguilar Morales manifestó que debía darse mayor amplitud a la defensa de los derechos de las personas que acuden a cualquier tribunal, por lo que el autorizado puede presentar documentos o copias que faltaron en aspectos formales de la demanda, es decir, que debieron acompañarse a la misma, antes de dictarse el auto de admisión, con lo que se facilitaría el cumplimiento de la prevención.

Además, consideró que no puede exigirse que la autorización esté reconocida ya que en esa etapa ello resulta complejo, aunado a que se trata únicamente de documentos que es necesario acompañar a la demanda, máxime que el domicilio que se señala para recibir notificaciones es el que corresponde al autorizado, el cual puede realizar el desahogo respectivo. Por ende, estimó que antes de la admisión de la demanda, si se trata de cuestiones directamente relacionadas con la acción, solamente puede realizarlas el actor, en tanto que si se trata únicamente de acompañar documentos, sí puede realizarlo el autorizado.

En cambio, una vez admitida la demanda, respecto a las atribuciones relativas a ofrecer pruebas, rendir alegatos o hacer valer medios de defensa, sólo podrá hacerlo el autorizado una vez que haya sido reconocido y verificado que cumpla con los requisitos legalmente exigibles.

El señor Ministro Valls Hernández se manifestó de acuerdo con el proyecto en el sentido de que el autorizado en la demanda fiscal está legitimado para desahogar prevenciones, atendiendo a lo previsto en el párrafo último del artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Estimó que las facultades que confiere este precepto nacen en virtud de la autorización, al tratarse de actos de mero trámite, sin que el desahogo de una prevención implique la ampliación de la demanda, lo que sí es un acto personalísimo.

La señora Ministra Luna Ramos consideró que el primer tema que debe analizarse es el relativo a la designación del autorizado. Recordó que el citado artículo 5º tenía una redacción diferente cuando se emitieron los fallos materia de la contradicción. Precisó el texto anterior y actual del citado numeral. Ante ello, estimó conveniente reconocer que el precepto en comento se refiere a dos tipos de autorizados: los que únicamente reciben notificaciones y se pueden imponer de autos y los que además pueden hacer valer recursos, ofrecer pruebas y alegar en juicio.

En ese orden de ideas, en el caso de los autorizados en términos amplios, respecto de los cuales el tribunal debe cerciorarse sobre tener el registro de su cédula profesional, es necesario determinar si basta la designación y en qué momento se debe realizar la verificación de mérito.

Estimó que una primera propuesta sería que en el primer auto que recaiga a la presentación de la demanda se deba pronunciar sobre si se tiene por autorizado al designado, en la inteligencia de que podrá impugnarse dicho auto, sin que ello deba realizarse hasta que se admita la demanda.

Una vez precisado lo anterior, sería posible determinar qué actuaciones puede realizar el autorizado.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas señaló que el primer auto que recaiga a la demanda, puede no ser de admisión, estimando que la simple designación del autorizado en la demanda, le permite a éste actuar, por lo que consideró que basta la simple autorización.

El señor Ministro Silva Meza precisó que en la ley no se advierte ningún condicionamiento para que el autorizado pueda actuar en representación del actor, lo que permite una adecuada defensa de éste, sin que haya distinción para ello.

Manifestó que a efecto de lograr una adecuada defensa, no se deben plantear limitaciones a los promoventes, tal como se sostuvo en la tesis de la Primera Sala.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que debía analizarse el tema relativo a los tiempos de reconocimiento de la autorización, a lo que agregó que es irrelevante el momento en que se firma la autorización porque el autorizado no se ostenta ante nadie; y, lo realmente relevante, es el momento de la presentación en el que debe haber un reconocimiento provisional de quien dice ser autorizado y lo debe ser para desarrollar los trámites correspondientes previos a la admisión de la demanda, surgiendo la interrogante de si éste debe ser licenciado en derecho.

Consideró que al haber una contradicción de tesis, no existe ningún problema para resolverla y que incluso, podría construirse una tesis que se ocupe de estos temas.

Estimó que al momento de la presentación de la demanda el nombramiento del autorizado ya tiene consecuencias jurídicas y ello implica que el tribunal debe pronunciarse desde el primer proveído, lo que da amplitud de defensa al actor, ya que el autorizado podrá cumplir con los requerimientos documentales. Consideró que la simple cita de la respectiva cédula profesional es suficiente para

tener por autorizado al así designado, sin menoscabo de que pueda ser impugnada la calidad respectiva.

El señor Ministro Franco González Salas consideró que respecto del punto concreto que se está discutiendo, es necesario distinguir entre el autorizado y el representante legal, pues aquél puede no existir. En cuanto a las notificaciones mencionó que la propia ley indica que debe señalarse un domicilio, por lo que no es determinante la existencia de un autorizado para tales fines, pues con independencia de ello debe designarse un lugar donde se realicen aquéllas y surtan efectos.

Agregó la importancia de valorar que la norma exige que el autorizado deba acreditar ser licenciado en derecho, por lo que en principio, el tribunal tiene la obligación de verificar el cumplimiento de ese requisito. Estimó que al respecto debe existir certeza jurídica, por lo que es necesario presentar los documentos oficiales que acrediten tal carácter.

El señor Ministro Aguilar Morales consideró importante no complicar las actuaciones procesales, ya que se trata de tres diversos momentos, antes de que se admita la demanda, donde pueden realizarse prevenciones para acompañar documentos. En ese primer momento debe reflexionarse que quien autorizó indica al tribunal que el autorizado es licenciado en derecho, lo que implica dar valor

al pronunciamiento del actor quien podría incurrir en falsedad por declaración ante autoridad judicial. Además, ello únicamente permitiría que el autorizado pueda desahogar las prevenciones respectivas atendiendo a una condición de buena fe.

En cambio, una vez admitida la demanda, para ejercer las diversas atribuciones como ofrecer pruebas, presentar alegatos e interponer recursos ya se podría exigir el pleno acreditamiento del carácter de licenciado en derecho del autorizado.

Por ende, propuso que inicialmente se puede considerar que basta la designación del autorizado para que éste pueda desahogar prevenciones relacionadas con el acompañamiento de documentos faltantes.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que los requerimientos iniciales pueden ser por motivos diversos a la falta de documentos. Agregó que el artículo 15 de la ley en comento prevé otros supuestos de documentos que se deben acompañar a la demanda. Por ende estimó que se trata de dos tipos de requisitos, los previstos en el artículo 14, relacionados con el ejercicio de la acción, y los señalados en el artículo 15, relacionados con aspectos formales de la demanda, por lo que estimó conveniente distinguir sobre qué tipo de requerimiento se realiza para determinar qué prevenciones se pueden desahogar.

Estimó que no basta la simple designación para que el autorizado ya pueda actuar, máxime que la fracción XIII del artículo 17 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa así lo prevé. Por ende, es una obligación del tribunal registrar las cédulas de los litigantes así como los poderes notariales de los representantes de las partes en el juicio, lo que no ocasiona ningún problema, pues sería así, si sólo hasta que se admitiera la demanda que se pudiera abordar el tema.

Consideró que en todo caso, si desde el momento en que se presenta y se dicta el primer auto de requerimiento por falta de requisitos, se establece la obligación de que el Secretario cumpla con su facultad de cerciorarse de que se trata de un abogado registrado, se da el reconocimiento y otorgado este reconocimiento, se puede estimar que le causó perjuicio al desechar la demanda o tenerla por no presentada, pues se tendría la posibilidad de recurrir el auto. Por ende estimó que el reconocimiento debe realizarse desde el primer auto.

El señor Ministro Gudiño Pelayo precisó que el proyecto se realizó conforme al texto anterior del artículo 5º de Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Agregó que la tesis que propone coincide con la postura de la señora Ministra Luna Ramos. Señaló que en la tesis que se propone se indica: “AUTORIZADO PARA OÍR

NOTIFICACIONES EN LA DEMANDA FISCAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA DESAHOGAR PREVENCIÓNES. El último párrafo del artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señalaba que los particulares podrán autorizar a otra persona para que a su nombre, entre otras, haga promoción de trámite, en términos del último párrafo del artículo 15 del mismo ordenamiento. Esto es así, porque el sólo inicio de la acción marcado por la presentación del escrito de la demanda es exigible en forma directa al actor y en su defecto a su representante legal, pero las irregularidades de su presentación, al ser de índole formal pueden ser subsanadas por el autorizado al que se conceden facultades que tienden a facilitar los derechos de defensa del autorizado, así el autorizado para oír notificaciones en la demanda fiscal está legitimado para desahogar prevenciones, tomando en cuenta que esas se reducen a exhibir ciertos documentos, constancias o copia para correr traslado y que no se trata de ampliar o aclarar la demanda, que son actuaciones de carácter personalísimo, sino de promociones de trámite para subsanar requisitos formales.”

Agregó que sería necesario actualizar la tesis haciendo referencia a la reforma realizada al artículo 5º en comentario.

Estimó que existen dos posibilidades: la primera, consistente en que al presentar la demanda el tribunal

reconozca el carácter de autorizado y realice la prevención, y, la segunda, en la que se previene sin pronunciarse sobre el autorizado. En ese caso, si el autorizado presenta los documentos estimó que el tribunal necesitará verificar si éste cumple con los requisitos respectivos, lo que evitará que el tribunal tenga que pronunciarse en el primer proveído sobre si el autorizado cumple con ellos.

Reiteró que sería válido que el pronunciamiento sobre el carácter del autorizado lo puede realizar el tribunal desde el primer proveído o bien hasta que se desahogue la prevención.

El señor Ministro Aguirre Anguiano expresó su interrogante sobre la jerarquía normativa del reglamento interior de un tribunal respecto de los terceros que se presentan a demandar administración de justicia. Estimó que la Ley de Profesiones establece que si se tiene el título de licenciado en derecho se tiene reconocido el grado académico necesitándose una patente de ejercicio que es la cédula correspondiente.

Agregó que si existe un reglamento que somete a previos registros burocráticos, surge la interrogante sobre qué valor tiene aquél.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia señaló que no hay la obligación de que los abogados se inscriban al

registro respectivo, pues de no hacerlo podrán, en cada juicio, presentar los documentos respectivos, tal como sucede incluso en el caso del Poder Judicial de la Federación.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea mencionó que el registro del Poder Judicial de la Federación es una ventaja para los abogados ya que facilita el registro respectivo mediante un trámite muy sencillo.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia propuso que en principio se distinga entre los requerimientos del artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con aquéllos que prevé el diverso 15, por lo que distinguió entre dos grupos: el primero comprende de las fracciones I a IV, respecto a los documentos que se deben presentar con la demanda y sus anexos, entre los que se encuentra el documento que acredite la personalidad de quien firma la misma y proporciona datos del registro del documento ante el tribunal, el documento en el que consta la notificación de la resolución impugnada, los requisitos que podría cumplir el autorizado, no abogado pues se trata de requisitos de trámite.

En relación con el segundo grupo, se encuentran las fracciones V a VII del referido numeral, que requieren una promoción y la intervención profesional de un abogado por tratarse, entre otros, del cuestionario que deberá desahogar

el perito, el interrogatorio a que se sujetarán los testigos y el ofrecimiento de pruebas.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea precisó que las particularidades que pueden surgir son múltiples, suscribiendo la propuesta del señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia.

La señora Ministra Luna Ramos dio lectura a las fracciones que comprenden el artículo 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo.

El señor Ministro Gudiño Pelayo señaló que a su juicio, únicamente se debía modificar de la tesis de mérito la porción que señala: “cuando en el documento en el que conste la resolución impugnada a que se refiere la fracción III de este artículo, se haga referencia a información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades que en materia de operaciones entre las partes relacionadas establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, el demandante se abstendrá de revelar dicha información. La información confidencial a que se refiere la ley citada, no podrá...”.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia manifestó que lo previsto en las citadas fracciones I a V se puede cumplimentar por cualquiera de las personas

señaladas como autorizadas, sin necesidad de reconocimiento por parte del tribunal.

En relación con las diversas VI a IX recordó que solamente pueden ser cumplidas por el autorizado para oír notificaciones, que sea licenciado en derecho y que tenga facultades de promover.

Manifestó que la tesis quedaría en el sentido de que es responsabilidad del magistrado instructor pronunciarse en cuanto a autorizar para oír notificaciones a los señalados en la demanda en el primer acuerdo que recaiga a la presentación de la misma, con independencia de lo que se acuerde en este auto.

En caso de no cumplir con lo anterior, se genera una presunción afirmativa ficta con duración hasta el momento en que se dé un pronunciamiento expreso.

Por último, las prevenciones a que se refiere el artículo 14 de la citada ley, caso en el que solamente el promovente de la demanda y no los autorizados, deberá cumplimentarlas.

El señor Ministro Franco González Salas manifestó que le surgió la interrogante respecto si es o no necesario el reconocimiento de autorizado, pues si no se le reconociera

dicha calidad, se cuestionó si se debe o no tener por cumplido el requerimiento.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia recordó que la personería no se puede desconocer con efectos retroactivos y que el autorizado en términos amplios es un mandatario judicial, por lo que la omisión del magistrado instructor de no reconocerla, da lugar a una presunción de afirmativa ficta hasta en tanto se emita resolución expresa, lo que se traduce en reconocer las actuaciones en el momento que las realice y no en el momento de acordarlas.

El señor Ministro Franco González Salas manifestó que valdría la pena plasmar dicha consideración en la tesis que se redacte, pues en caso contrario, se generarían una gran cantidad de impugnaciones.

La señora Ministra Luna Ramos aclaró que se debía tomar en cuenta lo señalado por el señor Ministro Franco González Salas en el sentido de que si el tribunal no le reconoce el carácter de abogado porque en su libro no conste su cédula, se le reconocería si se presentara con posterioridad, por lo que el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia aclaró que no podría tomarse con efectos retroactivos.

Por ende, la señora Ministra Luna Ramos aclaró que en la hipótesis planteada, sin que se le dieran efectos

retroactivos, debía de reconocérsele con posterioridad, por lo que el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia estimó que de reconocérsele la personalidad, cuando no se tuvo por reconocida, se revocaría una determinación del magistrado.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que coincidía con la propuesta del señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia y sugirió que no se siguieran buscando diversas hipótesis, pues el caso concreto era muy claro, ya que el autorizado presenta promociones, acredita que es abogado y se le tiene por reconocida su personalidad, a lo que la señora Ministra Luna Ramos expresó que efectivamente en todos los casos debía operar la regla positiva ficta.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia señaló que así debía ser, además de tomar en cuenta la propuesta del señor Ministro Franco González Salas en la que se agregue que en caso de que con fecha posterior se determine no reconocerle tal carácter, no podría ser con efectos retroactivos.

El señor Ministro Aguilar Morales consideró que establecer la afirmativa ficta correspondería al legislador y no a la jurisprudencia. Recordó que propuso que en las fracciones I a V del artículo 15 de la ley en comento cualquiera de los autorizados pudiera presentar documentos faltantes.

Respecto a la hipótesis de que el magistrado no se pronunció, ya que no debería establecerse una responsabilidad a éste, sino por el contrario, se debía partir de la base de que el actor decidió señalar a determinada persona para llevar los documentos faltantes y no establecer en la tesis la generación de una afirmativa ficta, pues se estaría legislando, por lo que se debía únicamente verificar que la persona que entregó los documentos, se encuentra nombrada en la demanda y si hubo una afirmación en el sentido de que no era abogado, no se le recibirían los papeles por el pronunciamiento del magistrado instructor. Lo anterior debido a que no estaría de acuerdo en generar la figura jurídica de la afirmativa ficta.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia manifestó que valdría la pena que la tesis señalara que “los requisitos de las fracciones VI a la IX pueden ser cumplidos por el autorizado para oír notificaciones en términos amplios por ser licenciado en derecho, salvo el caso de que en el acuerdo le hubieran negado este carácter”, con lo que consideró quedaría cubierta la hipótesis en comento.

El señor Ministro Gudiño Pelayo manifestó que le surgían interrogantes respecto de la afirmativa ficta, por considerar innecesario incluirla en la propuesta.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea estimó que el término de “afirmativa ficta” es la consecuencia que se le da al silencio administrativo ante la solicitud de un particular, por lo que se debía matizar de conformidad con lo señalado por el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Aguirre Anguiano estimó que el registro para la profesión de abogados en el Estado de Jalisco, resulta muy práctico pues basta invocar un número para acreditar la posibilidad de ejercer la profesión, por lo que reconoce las bondades de un procedimiento de prerregistro en tribunales.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia estimó que con la propuesta de la señora Ministra Luna Ramos se evitaría el tema de la calidad de abogado, pues puede surgir el problema de que a cualquier persona, con la presentación de un simple número, se le tenga con facultades para comparecer en una audiencia y si con posterioridad a ésta se demuestra que no tenía la calidad de licenciado en derecho, surgiría el problema de qué debía suceder con las actuaciones realizadas; sin embargo, aclaró que dicho tema no formaría parte de la tesis en comento.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea señaló que la profesión de abogado requiere de cédula para su ejercicio, por lo que resulta una carga para el abogado demostrar que lo es, por tanto, surge la interrogante de determinar qué

sucedería con las actuaciones que realizaron cuando no se trataba de licenciados en derecho; sin embargo, también coincidió con el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia respecto a que dicho tema excede la materia de la presente tesis.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia señaló que el registro de cédulas profesionales es utilizado por la Secretaría de Educación Pública y que existe también en diversos Estados, lo cual estimó muy práctico y propuso que no se abordara más el tema.

La señora Ministra Luna Ramos agregó que si no se cuenta con el número de registro en el tribunal, se podría acreditar el título de licenciado en derecho con las copias correspondientes.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia resumió que la tesis podría tener el rubro: “AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES EN EL JUICIO FISCAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CASOS EN LOS QUE PUEDEN CUMPLIR REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL ESCRITO DE DEMANDA”.

Agregó que para tal fin se cuenta con tres categorías: primera: los requerimientos relativos a la presentación de documentos indicados en las fracciones I a V del artículo 15 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso

Administrativo pueden ser desahogados por cualquiera de los autorizados en términos del artículo 5o. de la ley indicada; segunda: los requerimientos relacionados con las fracciones VI a IX del artículo 15 de la misma normativa únicamente pueden desahogarse por los autorizados en los términos amplios del referido artículo 5o., siempre y cuando en el acuerdo respectivo no se le haya desconocido ese carácter; y tercera, las prevenciones sobre el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el artículo 14 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo sólo pueden desahogarse de forma directa por el actor.

El señor Ministro Aguirre Anguiano se manifestó de acuerdo con la tesis excluyendo de su redacción lo relativo a que se trate de actos personales o personalistas.

Sometida a votación económica la propuesta alterna de la señora Ministra Luna Ramos, con las modalidades precisadas por el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia, en el sentido de que debe unificarse el criterio de interpretación, en la inteligencia de que 1) los requerimientos relativos a la presentación de documentos indicados en las fracciones I a V del artículo 15 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo pueden ser desahogados por cualquiera de los autorizados en términos del artículo 5o. de la ley indicada; 2) los requerimientos relacionados con las fracciones VI a IX del artículo 15 de la misma normativa únicamente pueden desahogarse por los

autorizados en los términos amplios del referido artículo 5o., siempre y cuando en el acuerdo respectivo no se le haya desconocido ese carácter; y 3) las prevenciones sobre el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el artículo 14 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo sólo pueden desahogarse de forma directa por el actor, se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia; en la inteligencia de que la redacción definitiva de las referidas tesis, cuyo texto se incluye en la sentencia correspondiente, una vez aprobado el engrose respectivo, se someterá al procedimiento administrativo que regularmente se sigue ante el Comité de Aprobación de Tesis integrado por los señores Ministros Luna Ramos y Gudiño Pelayo.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia decretó un receso a las trece horas con cinco minutos y la sesión se reanudó a las trece horas con treinta minutos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

II. 273/2009

Contradicción de tesis número 273/2009, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver los amparos directos 267/2009 y 577/2008, respectivamente. En el proyecto formulado por el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se propuso: *“PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis denunciada. SEGUNDO. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por este Tribunal Pleno, en términos del último considerando de esta ejecutoria. TERCERO. Publíquense y difúndanse en términos de ley esta ejecutoria y la jurisprudencia resultante”*. El rubro de la tesis a que se refiere el punto resolutivo Segundo es el siguiente: *“AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN A JUICIO RESPECTO DE LA CUAL NO SE AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA”*.

El señor Ministro ponente Gudiño Pelayo expuso los antecedentes del presente asunto así como una síntesis de las consideraciones que la sustentan.

El señor Ministro Aguirre Anguiano manifestó que en relación con el criterio que se propone, debe estimarse que se trata de una sentencia definitiva aun cuando no se haya

hecho valer el recurso respectivo, por lo que el desechamiento lo debe dictar el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento.

El señor Ministro Aguilar Morales estimó que el órgano que deseche debe ser el competente. Además señaló que el problema ya está resuelto por el Pleno de la Suprema Corte en la tesis jurisprudencial 40/1997 que lleva por rubro y texto: “DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba

conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidir las únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del Máximo Tribunal en segunda instancia”.

Por tanto estimó que si se solicita la modificación de la jurisprudencia así debería plantearse; sin embargo, al existir jurisprudencia debe declararse improcedente esta contradicción de tesis.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea señaló que el caso de la jurisprudencia que se refiere es diverso al que se plantea, dado que una cuestión es la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito para conocer de una demanda de amparo directo contra una resolución que pone fin al juicio y otra diversa es la procedencia del juicio respectivo atendiendo al cumplimiento del principio de definitividad.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia señaló que el artículo 46 de la Ley de Amparo indica que para efectos del artículo 44 de la propia ley son sentencias definitivas aquéllas que resuelvan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes no conceden recurso alguno.

Agregó que si hay recurso pendiente no existe resolución que pone fin al juicio, por lo que si un Tribunal Colegiado descubre que efectivamente el acto reclamado en realidad no es sentencia o resolución definitiva, debe declararse incompetente y turnarla al juez de Distrito que corresponda, consideración ya expresada en la jurisprudencia del Pleno respecto de una sentencia de primera instancia, estimando que la referida demanda no es de su competencia.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea manifestó su conformidad con lo señalado por el señor Ministro Presidente

Ortiz Mayagoitia y agregó que debía de reelaborarse la tesis, pues al hacer referencia a una sentencia definitiva, se hace alusión al auto que pone fin al juicio y para evitar confusiones, valdría la pena agregar la tesis P./J./40/97, con lo que manifestaría su conformidad con la propuesta.

La señora Ministra Luna Ramos estimó que la contradicción de tesis debe declararse sin materia al existir además de la jurisprudencia mencionada, la diversa que lleva por rubro: “DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN A JUICIO”.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea señaló que incluso existe la tesis jurisprudencial que lleva por rubro: “AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA”.

El señor Ministro Gudiño Pelayo indicó que no tendría inconveniente en realizar el engrose en los términos de que carece de materia la contradicción de tesis.

El señor Ministro Aguirre Anguiano estimó que debía quedar claro que no se trata de un problema de procedencia sino de competencia, a lo que el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia agregó que se trata de dos temas ligados, pues la improcedencia del amparo directo no es necesariamente determinante de la improcedencia del amparo indirecto, pero sí la razón para que el tribunal colegiado se estime incompetente, por lo que el señor Ministro Aguirre Anguiano consideró que lo anterior no elucida la contradicción, pues la misma se podría fijar de la siguiente forma: “no habiéndose ejercido contra la sentencia conclusiva o auto que pone fin al juicio el recurso ordinario o medio de defensa”.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia estimó que el concepto procesal de sentencia definitiva, como la conclusiva de un proceso, es diferente del concepto restringido de sentencia definitiva para los efectos del amparo a que se refiere el artículo 46 de la ley de la materia.

La señora Ministra Luna Ramos dio lectura a la tesis jurisprudencial de rubro y texto: “DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que

se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad”.

Manifestó que se trata de un caso típico de diferencia entre competencia, que implicaría que el juzgador no pudiera conocer del asunto y procedencia, que originaría el sobreseimiento o desechamiento por no agotar el principio de definitividad.

El señor Ministro Franco González Salas señaló que dados los argumentos y tesis a las que se ha dado lectura la presente contradicción de tesis carece de materia.

El señor Ministro Gudiño Pelayo solicitó que se votara el asunto para determinar si quedaría sin materia.

Sometida a votación la propuesta modificada en el sentido de declarar que carece de materia el presente asunto, se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos, convocó al Tribunal Pleno para la sesión pública que tendrá verificativo el lunes veintidós de marzo del año en curso a las diez horas con treinta minutos y concluyó la presente sesión a las catorce horas con cinco minutos.

Sesión Pública Núm. 33

Jueves 18 de marzo de 2010

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.